

Esther del Campo (editora), *Interculturalidad, democracia y desarrollo en Bolivia*

Por *Ignacio García Marín**

La obra *Interculturalidad, democracia y desarrollo en Bolivia* analiza, a lo largo de diez capítulos y una introducción, la actualidad boliviana –y en menor medida ecuatoriana– desde un punto de vista político, social y cultural. Editado por la profesora y politóloga española Esther del Campo, el énfasis se concentra en torno a la nueva situación de Bolivia a raíz de la llegada de Evo Morales a la Presidencia en 2005 y, en especial, desde la entrada en vigor, en 2009, de una nueva Constitución. Este cambio del marco jurídico no ha sido intrascendente, ya que en la práctica ha supuesto el reconocimiento del Estado como impulsor y promotor de la interculturalidad que redefine el papel de éste pero, a la vez, que busca integrar a las nacionalidades y colectivos indígenas tradicionalmente excluidos de lo que podríamos denominar el Estado liberal y democrático occidental y *occidentalizante*. Huelga decir que, bajo estas premisas, el rol jugado por las organizaciones indígenas y la propia agenda política intercultural del gobierno de Evo Morales desde 2009 son objetivos claros de estudio, además de las tensiones que pudieran surgir en torno a la matriz desarrollista nacional ante la articulación del desarrollo local y territorial recogido en la nueva Constitución.

Se trata de un proyecto que busca socavar siglos de exacerbación de la diferencia y el racismo institucionalizado, en pos de un horizonte común y compartido, pero a la vez, se trata de rediseñar la arquitectura institucional y cultural del Estado. Es decir, estaríamos ante un nuevo proyecto de país y de sociedad, que pueda superar fracturas pasadas y apostar, al menos desde el discurso, por un modelo integracionista, plural y unitario, desde la heterogeneidad social y cultural que Bolivia representa. Dicho proceso enfrenta numerosas dificultades, tanto a nivel interno como externo, así

* Licenciado en Sociología por la Universidad Carlos III de Madrid. Maestrante en Estudios Contemporáneos de América Latina en la Universidad Complutense de Madrid. Investigador en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración II en dicha Universidad. E-mail: <nachogarciamarin08@gmail.com>.

como limitaciones derivadas de la propia Carta Magna o del significado que el propio gobierno está concediendo a eventos con carga cultural indígena que en demasiadas ocasiones distan de la realidad, acercándose a la *folclorización* de lo no-occidental.

No obstante, para un óptimo análisis de lo que estos cambios políticos e institucionales representan, se hace necesario un abordaje académico en torno a lo que el interculturalismo, la descolonización y la plurinacionalidad supondrían. En este sentido, Gustavo Bonifaz, Rafael Baustista y Xavier Albó presentan, a lo largo de sus respectivos capítulos, un debate entre las identidades grupales y la democracia, o entre lo que podría suponer la diferencia cultural entre los distintos colectivos que conforman Bolivia y lo que representaría el Estado unitario; de tal manera que se superen tanto el clivaje étnico como los temores que pudieran surgir hacia el nuevo marco de pretendida igualdad formal y real. Todo ello, tratando de lograr un renovado concepto de pluralismo político, más aglutinador, más respetuoso de la diferencia pero, especialmente, generador de horizontes comunes. Aquí, el interculturalismo, que puede ser entendido como la relación entre diversos colectivos o grupos culturales, podría tener connotaciones negativas o positivas según el enfoque que tomemos, pero independientemente de ello, requiere de una aceptación de la diferencia que logre la construcción del *nosotros* cultural.

Este proceso requeriría, asimismo, de una necesaria descolonización jurídica y cultural del Estado apoyado en un multiculturalismo abierto, es decir, logrando la autonomía a través del reconocimiento del *otro*. La plurinacionalidad supondría pues la superación del Estado colonial por un modelo común de identidades y colectivos convergentes, pero también la respuesta sobre qué significa ser boliviano y cómo articularlo comunitaria y unitariamente hablando, ya que la propia Constitución no sólo aborda el presente y futuro de las relaciones entre el ciudadano, la identidad grupal y el Estado, sino también el cómo fundamentar una nueva política y el hacer política.

A su vez, este escenario de re-ubicación societal y estatal debemos circunscribirlo bajo los efectos de la globalización, hecho que, en palabras del propio Bonifaz, impacta fundamentalmente en la configuración de “la frontera política” bajo tres niveles: el económico, donde se ha profundizado la desnacionalización de los mercados e industrias estatales; el identitario, con una posible homogeneización a nivel global a través de la cultura de masas junto a la potenciación de lo local como reacción y consecuencia de esta uniformización a través del consumo, y, por último, el nivel epistemológico, con la ruptura de la visión lineal de la historia y del racionalismo previo. Precisamente bajo este contexto global guardaría importancia este nuevo proyecto de sociedad y Estado que Bolivia representa, al suponer el choque de la uniformización occidental heredada ante la multiculturalidad y multiétnicidad evidente que, bajo unas condiciones de elevada desigualdad –social, económica y política–, se

soterraba. Supone, por tanto, el debate en torno a una nueva identidad nacional más integradora e igualitaria, que cuestione la anterior República criolla asimétrica.

Es claro que este cambio de escenario responde igualmente a factores internos, ya que las reivindicaciones por parte de los colectivos indígenas se llevaron a cabo no sólo durante la época colonial sino quizá, con mayor profusión y virulencia, a partir de la independencia y posterior institucionalización de la República criolla. En este sentido, Albó nos presenta un breve resumen de tales luchas, sin dudar en afirmar que la llegada de Evo Morales al gobierno boliviano supuso una “muy larga, acumulativa y múltiple lucha” de dichos colectivos ante aquellos que ostentaron, hasta entonces, el poder en sus distintas dimensiones. De ahí que debamos conceder importancia a lo que podría suponer el nuevo proyecto que vive Bolivia, al tratar de revertir inequidades y relaciones de poder mantenidas durante siglos.

Al reconocer a esta nueva Carta Magna y al actual gobierno de Morales y sus intentos de llevar a cabo un proyecto inclusivo y de reconocimiento ante las demandas de colectivos sociales de diversa índole y de larga tradición, estaríamos, como Pablo Stefanoni ilustra, ante una aspiración pionera por su profundización y proposiciones. Se trata de refundar y descolonizar el propio Estado, promoviendo desde el poder público cosmovisiones no únicamente occidentales y realzando la cultura de raíz no occidental en pos de una nueva Bolivia plurinacional y no pretendidamente homogénea. En este sentido, tal y como se subrayó anteriormente, la interculturalidad vendría a ser la vía articuladora entre las diferentes identidades del país, pero siendo, eso sí, no una realidad sino un objetivo a lograr, toda vez que las relaciones de poder y la arquitectura del poder político-económico boliviano actual distan aún de ser todo lo inclusivo que debieran ser. Ello porque a lo largo de estos siglos de dominación española primero, y de hegemonía criolla después, lo indígena fue tratado como un todo homogéneo, extranjero en su propio Estado y carente de identidad propia y autonomía. De ahí que puedan plantearse dudas en torno a la posibilidad de que todo aquello que se propone a través del proyecto político naciente en 2005 y constitucionalizado parcialmente en 2009 sea, cuando menos, viable. Pues se presentan dilemas, desafíos y obstáculos en el propio asentamiento de la ciudadanía intercultural. En este sentido, tal y como señala María Soledad Quiroga, se trata de generar algo nuevo que no sea de raíz puramente liberal-occidental, donde la igualdad formal dé paso a una igualdad real. De transformar una tradicional desigualdad económica, política y social, a una complementariedad de identidades que unifique lo grupal con lo individual, pero a su vez lime las asimetrías en las relaciones de poder que aún perduran en el país. Para ello vendría el reconocimiento a la plurinacionalidad latente, tanto desde el plano cultural como desde un re-pensamiento de la forma del Estado, así como de la autonomía política a las distintas identidades.

La duda que aquí se plantea, y que autores como Pedro Portugal y Carlos Hugo Laruta exponen, es cómo llevar a cabo este proceso. Tanto el que concierne a la descolonización cultural como el que se refiere a la plurinacionalidad multidimensional. ¿Contará con el consenso de aquellos colectivos, en especial criollos pero potencialmente perdedores en las nuevas relaciones de poder? ¿Lo continuarán los siguientes movimientos y fuerzas políticas que lleguen a la presidencia tras Evo Morales? No cabe duda de que es pronto para responder a estas cuestiones, pero la respuesta vendrá, parcialmente, de cómo se pueda lograr la puesta en marcha de dos conceptos a veces contradictorios: lo unitario y lo plurinacional, y de ahí, el acervo sociológico e incluso sentimental que los ciudadanos y colectivos del país generen. Es decir, el propio compromiso que sustente este nuevo proyecto de país y, a la vez, esta nueva visión del Estado, sin olvidar las propias fisuras que el Movimiento Al Socialismo (MAS) y/o el oficialismo pudieran padecer y, con ello, nuevas alianzas políticas que modifiquen el escenario político.

En este sentido, el balance provisional que podría realizarse sobre la labor de gobierno de Evo Morales, en cuanto a la descolonización y creación de una nueva cosmovisión plural y multicultural, derivada del mandato constitucional, es cuestionable. Bien sea porque se trata de una tarea que deberá realizarse con objetivos largo-placistas, o bien porque requerirán de un obligado consenso transversal en lo ideológico e identitario. El discurso oficialista y los principios que la propia Constitución establece no se plasman aún de forma real y cristalina en la sociedad boliviana. Incluso, como recalca Portugal, numerosos eventos indigenistas se están potenciando desde el propio gobierno de Evo Morales, con una clara reinterpretación e incluso invención de significados, costumbres y actos que nada tienen de indígena, generando en su opinión una nueva folclorización de lo indígena, al imponer una visión irreal y occidentalizada de dichas culturas. Ciertamente es que la celebración del Año Nuevo Aymara o la utilización en actos oficiales de vestimenta supuestamente indígena, a pesar de su carencia de rigor antropológico y cultural, podrían generar una revalorización o, al menos, visibilización de culturas antes ocultadas desde el poder público. No obstante, podría suponerse también que el proyecto de multiculturalidad, interculturalidad y descolonización comienza con notables errores de gestión y planificación por parte de uno de sus principales impulsores.

Aquí, sin duda, el reciente conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS), que nos presentan Íñigo Errejón y Manuel Canelas, supone el avistamiento de potenciales conflictos antes no tan visibles, como es el de la apropiación del “proceso de cambio” entre el MAS y otros colectivos sociales, o la problemática que el desarrollismo y el extractivismo generan, tanto en el caso boliviano como en el ecuatoriano. Sirvan de ejemplo las tensiones dentro de organizaciones tan importantes para los colectivos indígenas como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ),

y las que han vivido en el MAS, acercándose incluso, en ocasiones, a aliados contranatura como ciertos gobiernos conservadores de la media luna criolla del país. Estos conflictos entre actores sociales razonablemente complementarios, además del proceso de protesta social y división surgida en torno a la edificación de la carretera que atravesará el TIPNIS, mostrarían que los propios intereses electorales, las diferencias de visión sobre lo indígena y las dificultades para gobernar al país, pueden suponer la ruptura de consensos y coaliciones que lleven a cabo políticas de implementación del nuevo proyecto de país.

Un ejemplo de estos avances y retrocesos podría encontrarse en el actual desarrollo de la autonomía indígena. En este sentido, Esther del Campo y Jorge Resina son rotundos al afirmar que desde un plano cultural y social el avance y el reconocimiento a las distintas realidades culturales del país han sido notables. La duda aparece en materia política. Dejando de lado que estos colectivos no demandan grandes cambios en la estructura del Estado y que sus reclamos distan de poder considerarse radicales, es notable que la propia Constitución limita sus capacidades reales de decisión y autogobierno. Véase por ejemplo lo referido a la consulta previa no vinculante, o a la imperante visión republicana del modelo departamental del país, lo que en la práctica cuestionaría la trascendencia de la autonomía indígena. A ello podría sumarse el monopolio que los partidos políticos ostentarían en cuanto a la representación parlamentaria se refiere, no permitiendo la entrada a otro tipo de sujetos colectivos. Surge así una incertidumbre razonable sobre el alcance de esta senda iniciada en 2005 e impulsada en 2009. Esto, unido a las experiencias surgidas en torno a la implementación de una descolonización “folclórica” para algunos autores, más la división entre el MAS y ciertos aliados políticos que el conflicto en torno al TIPNIS ha mostrado, hacen que pudiera cuestionarse el propio espíritu de la implementación de la Carta Magna y de los valores pluriculturales que de ella emanan.

Otra cuestión a tomar en cuenta es la oposición territorial que pueda surgir ante esta nueva forma de interpretar el Estado, toda vez que la fractura económica, étnica y política entre el oriente y poniente bolivianos es evidente. Estaríamos hablando no ya de las tensiones que pudieran surgir entre distintos partidos políticos y movimientos sociales, sino de la fractura que podría ahondarse entre las mitades occidentales y orientales del país, fundamentadas parcialmente en cuestiones económicas y étnicas. Interesante resulta pues el estudio de caso que Gloria Ardaya expone en torno al desarrollo local y regional en Ecuador, por sus razonables similitudes respecto a Bolivia. Entiende la autora que el tradicional centralismo estatal debiera ser superado por una mayor territorialización de las políticas públicas, una potenciación de lo local y, por supuesto, por una valorización de las capacidades del ciudadano que facilite la convergencia entre las distintas regiones del país. En este sentido, estas prescripciones se hacen trasladables a la experiencia boliviana, ya que sin una mínima conciencia ciudadana de compromiso y solidaridad inter-territorial se vislumbra difícil el objetivo

de alcanzar un nuevo proyecto de nación que respete, realce y comparta las distintas culturas e identidades existentes en el país, incluida la criolla, pero no de forma preponderante como hasta ahora.

Lo anterior porque, como evidencia la obra, Bolivia se encuentra en una nueva situación de partida, donde las colectividades tradicionalmente excluidas deben tomar un nuevo protagonismo para redefinir el nuevo modelo de Estado y de sociedad junto a los demás grupos sociales, algo que sólo desde el consenso, el compromiso y la superación de inequidades y discriminaciones raciales puede lograrse. Sólo así podrán ser superados los numerosos obstáculos que el proceso político, iniciado en 2005, ha encontrado hasta ahora.

Esther del Campo (editora), *Interculturalidad, democracia y desarrollo en Bolivia*, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2012, Colección "Investigación y Debate", núm. 93, 256 pp.